

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1993/NGO/10
9 de agosto de 1993

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
45º período de sesiones
Tema 6 del programa

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, INCLUSO LA POLITICA DE DISCRIMINACION RACIAL Y DE
SEGREGACION Y LA POLITICA DE APARTHEID, EN TODOS LOS PAISES Y EN
PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES:
INFORME DE LA SUBCOMISION CONFORME A LA RESOLUCION 8 (XXIII)
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Comunicación presentada por escrito por la Federación Internacional
de los Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida
como entidad consultiva de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente comunicación que se
distribuye conforme a lo dispuesto en la resolución 1296 (XLIV) del Consejo
Económico y Social.

[5 de agosto de 1993]

CONTINUACION DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RWANDA PESE
A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS AUTORIDADES DE ESE PAIS DE ADOPTAR
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER FIN A TALES VIOLACIONES

I. Comisión Internacional de Investigación

1. Una Comisión internacional encargada de investigar las violaciones de los
derechos humanos cometidas en Rwanda realizó del 7 al 21 de enero de 1993, por
encargo de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Africa Watch
(coordinadores), así como también por la Unión Interafricana de Derechos de la
Persona y de los Pueblos y el Centro Internacional de Derechos Humanos y
Desarrollo Democrático, una investigación sobre las violaciones de los

derechos humanos cometidas en ese país a partir del 1º de octubre de 1990, fecha del comienzo de la guerra. En su informe publicado el 8 de marzo de 1993, la Comisión, integrada por 10 expertos de ocho nacionalidades diferentes, describió las matanzas sistemáticas que habían sido perpetradas en el país y que ocasionaron más de 2.000 víctimas civiles pertenecientes principalmente a la etnia minoritaria tutsi, aunque también a los opositores políticos hutu del Presidente Juvena Habyarimana y del antiguo partido único, el M.R.N.D.

2. Según la Comisión Internacional, las violaciones de los derechos humanos se debieron a una política deliberada del régimen. La Comisión puso de manifiesto la responsabilidad del Presidente Habyarimana y de sus allegados, que, a su juicio, se hallaba muy comprometida. Las fuerzas armadas rwandesas, las milicias armadas del M.R.N.D. y de un partido aliado, la C. D. R., y los responsables administrativos de los municipios y los departamentos desataron, con toda impunidad, el terror en el país. La Comisión Internacional también verificó la fiabilidad de los testimonios que identificaban los lugares en que se habían enterrado las víctimas de las matanzas, procediendo ella misma a la excavación de dos de esos lugares.

3. La Comisión internacional puso de manifiesto que la exacerbación de las tensiones étnicas tenía por objeto reforzar la solidaridad de los hutu y, por ende, el régimen del propio Sr. Habyarimana; los enfrentamientos servían también para excusar el bloqueo del proceso de democratización.

4. Tras investigar por primera vez de manera sistemática las denuncias de violaciones de los derechos humanos por el Frente Patriótico Rwandés, la Comisión Internacional llegó a la conclusión de que el Frente Patriótico era culpable de ejecuciones sumarias y de robos y saqueos, igualmente impunes. Merced a una política deliberada consistente en expulsar de las zonas de guerra a sus habitantes, el Frente Patriótico Rwandés ha agravado considerablemente la situación por el traslado de poblaciones y su concentración en campos de refugiados, donde éstos viven sumidos en la miseria.

II. Nuevas matanzas en la región noroccidental del país

5. La Comisión Internacional de Investigación pudo investigar y reunir información sobre los incidentes que tuvieron lugar en diciembre de 1992 y a principios del mes de enero de 1993. Esos incidentes constituían a todas luces los primeros estremecimientos que auguraban violencias más graves. Muchos miembros de la Comisión Internacional pudieron comprobar que los alcaldes de los municipios del noroeste del país habían informado a la población que la violencia seguiría siendo limitada en tanto que los expertos internacionales permaneciesen en el país, pero que se recrudecería cuando éstos se fueran. Efectivamente, la violencia se recrudeció de manera dramática a partir del 21 de enero, día de la marcha de la Comisión Internacional, como si fuera para confirmar por adelantado las conclusiones que ésta se disponía a publicar, según las cuales la violencia estaba organizada por las autoridades político-administrativas del país.

6. Se desencadenaron ataques y se llevaron a cabo ejecuciones sumarias en los municipios de Giciye, Satinsyi, Ramba, Kanama, Kayove y Kibilira, en el departamento de Gisenyi, así como en Rutsiro, en el departamento limítrofe de Kibuye. Según las informaciones disponibles, parecía cada vez más claro que las nuevas matanzas se llevaban a cabo según los esquemas descritos por la Comisión en relación con las matanzas anteriores. También se produjeron incidentes, a veces graves, en el departamento de Byumba.

7. Tras varias semanas de violencia, el Frente Patriótico Rwandés, rompió el acuerdo del alto el fuego, volvió a tomar las armas y realizó una importante ofensiva en dirección de la capital Kigali. Como resultado de esa acción, el número de personas desplazadas pasó de 350.000 a 1 millón aproximadamente.

8. La violencia adquirió nuevas proporciones, procediéndose al asesinato de tutsi y de miembros de la oposición política acusados de ser "cómplices" del Frente Patriótico Rwandés. Por su parte, éste es también culpable de violaciones masivas de los derechos humanos, ante todo debido a la incidencia trágica que la reanudación de las hostilidades tiene sobre la suerte de las personas desplazadas. Además, el Frente Patriótico Rwandés es culpable de la ejecución de ocho funcionarios como mínimo y de otras personas que se encontraban en compañía de éstos, a saber:

- François Barengayabo, Vicepresidente del Tribunal de Apelación y sus dos hijos;
- Philip Gakwerere, Inspector de Minas y de Recursos Minerales, así como su esposa y tres de sus hijos;
- André Bukuru, Fiscal Adjunto;
- Cléophas Ntamushobora, juez en Ruhengeri;
- Jean-Bosco Munyaneza, Fiscal General Adjunto, así como su esposa y sus dos hermanos;
- Frédéric Rukasi, Inspector de Obras Públicas;
- Léonard Ntiribaringira, Fiscal Adjunto;
- Thaddée Gasana, burgomaestre del municipio de Kinigi, y Elasic Ntuyenabo, un hombre de negocios activo en política que le acompañaba.

Finalmente, según testimonios del clero local, el Frente Patriótico Rwandés mató a unos 200 civiles en Gahanga y otras feligresías próximas a Ruhengeri. Esas ejecuciones han tenido lugar mayormente al margen de las operaciones militares.

III. Reacción de las autoridades rwandesas al informe de la Comisión Internacional

9. Tras haber recusado inicialmente las conclusiones de la Comisión Internacional de Investigación, acusando a ésta de parcialidad, el Presidente de la República tuvo que llegar a un acomodo con la oposición. Como resultado de ello, el 7 de abril de 1993 se emitió una "declaración del Gobierno rwandés relativa al informe final de la Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Rwanda a partir del 1º de octubre de 1990". En dicha declaración, el Gobierno rwandés reconocía las violaciones de los derechos humanos imputables a las autoridades rwandesas, y deploraba y condenaba esas violaciones. El Gobierno enunció una lista de medidas que se comprometía a adoptar para poner término a dichas violaciones. Entre otras cosas, prometió adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los rwandeses y sancionar por vía administrativa y judicial a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Se comprometió a mejorar las condiciones de detención; a no mantener presos en lugares que no estaban destinados para tal fin, como los campamentos militares; a realizar una campaña para persuadir a los rwandeses de la importancia de la reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos; a poner fin a las actividades de las milicias armadas de los partidos políticos; a reintegrar en sus empleos a las personas que habían sido expulsadas de ellos por razón de su pretendida complicidad con el Frente Patriótico Rwandés; a proseguir las investigaciones emprendidas por la Comisión Internacional de Investigación acerca de las fosas comunes descubiertas por ésta; a ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos; a retirar las reservas que había formulado en el momento de la ratificación de determinados instrumentos internacionales de esa clase; a respetar todos los acuerdos resultantes de las negociaciones de paz de Arusha, y a proseguir el proceso de democratización y establecer una Comisión Nacional de Derechos Humanos.

10. Los compromisos del Gobierno, caso de que se hubieran cumplido, habrían representado un progreso importante en lo referente al respeto de los derechos humanos en Rwanda. Desgraciadamente, el Gobierno no ha adoptado todavía medida alguna para aplicar esos compromisos.

IV. Violaciones de los derechos humanos y bloqueo del proceso de paz

11. El 9 de enero de 1993, el Gobierno rwandés firmó con el Frente Patriótico Rwandés, en Arusha, República Unida de Tanzania, un acuerdo de paz por el que se garantizaba la participación del Frente Patriótico Rwandés en la administración del país y se organizaba la transición hacia la celebración de elecciones libres. En una alocución dirigida a la nación el 25 de enero de 1993, varios días después de reanudarse las matanzas, el Presidente Habyarimana definió la violencia como una reacción popular contra los acuerdos de Arusha y no pronunció una sola palabra para condenarla. En una nueva alocución pronunciada el 28 de enero, el Presidente se manifestó, en términos débiles y generales, en contra de la violencia.

12. En una carta dirigida el 5 de febrero de 1993 a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente de la República reiteró sus razonamientos según los cuales el conflicto entre los hutu y los tutsi era inevitable debido a la invasión del Frente Patriótico Rwandés. En un discurso pronunciado a mediados de marzo ante los jefes del ejército, el Presidente dio a entender que era el propio Frente Patriótico Rwandés, y no las autoridades rwandesas, el responsable de las matanzas que habían puesto de luto al país. Sugirió que era incluso posible que esas matanzas habían sido organizadas por quienes contaban con explotarlas cínicamente con fines políticos, es decir, como pretexto para reanudar las hostilidades.

13. El 3 de febrero de 1993, el Gobierno rwandés creó una Comisión político-administrativa para investigar los "disturbios recientes". Esa Comisión presentó un informe al Gobierno el 3 de abril. La Comisión establece la existencia de varios hechos constitutivos de violaciones graves de los derechos humanos. Al igual que otras comisiones administrativas creadas anteriormente, la Comisión facilita información útil que establece de manera incontestable la existencia de tales violaciones, sin llegar a imputar a nadie la responsabilidad por las mismas.

14. Posteriormente, las negociaciones han proseguido en Arusha. En repetidas ocasiones, cuando todo estaba listo para la ceremonia de la firma, las autoridades rwandesas daban marcha atrás aduciendo distintos pretextos.

15. No obstante, la continuación de la guerra y de las violaciones de los derechos humanos hace intolerable la vida de los ciudadanos rwandeses: clima de terror, alistamiento de niños de ocho años en las milicias del M.R.N.D. y de la C.D.R.; violaciones; atentados a la bomba; ejecuciones individuales de opositores políticos; ejecuciones colectivas; saqueos por parte del ejército; entrega de armas a civiles, lo que hace temer una evolución hacia una situación de caos tal y como sucede en otros países africanos, y parálisis completa del sistema judicial.

16. En un informe publicado el mes de junio de 1993, la organización Africa Watch, una de las cuatro organizaciones que patrocinaron la Comisión Internacional de Investigación, publicó un informe completo sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Rwanda a partir del 21 de enero de 1993. En ese informe, Africa Watch expresa sus temores de que en un futuro próximo se produzca un verdadero desmembramiento de la sociedad rwandesa. El informe finaliza con recomendaciones dirigidas al Gobierno rwandés, al Frente Patriótico Rwandés y a la comunidad internacional. Por lo que respecta a esta última, el informe le recomienda que: a) vincule la ayuda futura a Rwanda a las mejoras sensibles en la esfera de los derechos humanos. Esas mejoras pueden ser evaluadas gracias a indicadores concretos, como la imposición de sanciones a las autoridades implicadas en las violaciones de los derechos humanos que aún siguen desempeñando sus funciones; el enjuiciamiento de los responsables administrativos, miembros de las fuerzas armadas y demás personas acusadas de cometer abusos; la supresión de las menciones étnicas en los documentos de identidad; b) preste ayuda específica a la mejora del sistema judicial; c) ejerza presión sobre el Gobierno rwandés para que deje de armar a los civiles y adopte medidas con miras a limitar la disponibilidad y

el comercio de armas de fuego; d) ponga fin a toda asistencia militar al Gobierno rwandés y al Frente Patriótico Rwandés y ejerza presión para que los militares extranjeros abandonen el país, en particular para el retiro inmediato de las tropas francesas, excepción hecha de las tropas a las que se encomienden misiones internacionales de mantenimiento de la paz; e) continúe ejerciendo presión sobre el Gobierno rwandés y el Frente Patriótico Rwandés para que presten atención a las cuestiones de los derechos humanos.

17. La Federación Internacional de los Derechos Humanos pide a la Subcomisión que adopte todas las disposiciones necesarias para que se ponga fin en Rwanda a la situación de violaciones flagrantes y sistemáticas.
